



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional



Resolución Alcance Particular

Número: RESAP-2025-1-APN-UIF#MJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 2 de Enero de 2025

Referencia: EXPTE. UIF N° 1095/2017 - ESCRIBANO [REDACTED] S/ VERIFICACIÓN IN SITU

VISTO el Expediente N° 1095/17 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE JUSTICIA, la Ley N° 25.246 y modificatorias -conforme texto vigente al momento de los hechos-, el Decreto N° 290 del 27 de marzo de 2007 y modificatorios y las Resoluciones UIF Nros. 21 del 18 de enero de 2011 y sus modificatorias), 111 del 14 de junio de 2012 (actualmente reemplazada por la 90 del 13 de junio de 2024 y sus modificatorias) y 138 del 9 de diciembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 5° de la Ley N° 25.246 se creó la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (en adelante, la "UIF"), organismo con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE JUSTICIA.

Que la referencia a la Ley N° 25.246 a lo largo de la presente Resolución se efectúa conforme el texto ordenado según las modificaciones vigentes al momento de los hechos.

Que el artículo 20 de la Ley N° 25.246 enumeró los Sujetos Obligados a informar ante esta UIF, en los términos previstos en el artículo 21 de la citada norma, incluyendo en el entonces inciso 12 a los Escribanos Públicos.

Que por la Resolución UIF N° 21/2011-vigente al momento de los hechos- se reglamentaron las obligaciones que los Sujetos Obligados en cuestión debían cumplir ante esta UIF.

Que los artículos 23 y 24 del Capítulo IV de la Ley N° 25.246 establecieron el régimen sancionatorio que resulta aplicable ante posibles incumplimientos a las obligaciones establecidas en la normativa antes señalada.

Que a través de la Resolución UIF N° 111/2012 se reglamentó el procedimiento sumarial tendiente a la aplicación de las sanciones previstas en el capítulo IV de la Ley N° 25.246.

Que así las cosas, en el marco del expediente citado en el VISTO, mediante la Resolución UIF N° 138 del 9 de

diciembre de 2019 (la “Resolución de Instrucción” y/o Resolución de Inicio de Sumario) se ordenó instruir un sumario (el “Sumario”) tendiente a deslindar las responsabilidades que le pudieran corresponder a Alejandro [REDACTED]), en adelante denominado indistintamente, “el escribano” y/o “el Sujeto Obligado” en su carácter de Sujeto Obligado contemplado en el entonces inciso 12) del artículo 20 de la Ley 25.246 por haber incumplido, en principio, lo dispuesto en los artículos 20 bis, 21 inciso a) y b) y 21 bis de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, y en los artículos 7° incisos f), i), j) y k), 8° incisos b), g), h), i), j) y k), 9° inciso d), 10, 13 incisos f) y g) y 19 inciso 1) Resolución UIF N° 21/2011 y sus modificatorias por incumplimientos relacionados a: i) identificación y conocimiento del cliente; (ii) falta de declaración jurada de Persona Expuesta Políticamente; (iii) falta de consulta al listado de terroristas y/u organizaciones terroristas; y (iv) falta de reporte de operaciones sospechosas.

Que asumida la Instrucción, luego de realizadas las averiguaciones correspondientes y en virtud de la información obrante en el SRO (fs. 1035), se ordenó citar a [REDACTED] y notificarlo de la apertura del sumario a los fines de que presente su descargo y ofrezca prueba, otorgándole a tales fines la posibilidad de tomar vista de las actuaciones de conformidad a lo establecido en los artículos 17 y 19 de la Resolución UIF N° 111/2012 (fs. 1038).

Que asimismo, en dicha oportunidad, la Instrucción intimó al sumariado a efectos de que obtenga el Código de Usuario para acceder al Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes previsto en la Resolución UIF N° 96/2018.

Que el sumariado fue debidamente notificado del acto de apertura a fs. 1040/1041.

Que a fs. 1042/1043 se encuentra glosada el acta de retiro del Código de Usuario del Sistema de Notificación y Tramitación Electrónica, por parte del sumariado [REDACTED].

Que el día 17 de febrero de 2020 el Sr. [REDACTED] presentó descargo a través de su apoderado (fs.1052/1096).

Que allí se esbozaron los argumentos que hacen a su defensa y se efectuaron planteos de fondo.

Que la Instrucción, en fecha 27 de febrero de 2020 (fs. 1564), tuvo por presentado en legal tiempo y forma el descargo efectuado por el sumariado.

Que, en ese contexto, a través de la Resolución UIF N° 29 del 17 de marzo de 2020 y sus prórrogas, entre otras cuestiones, se dispuso la suspensión de los plazos de los sumarios administrativos que tramitaron ante esta UIF. Posteriormente, en virtud del dictado del Decreto N° 876/2020 y lo dispuesto en el artículo 1° de la Resolución UIF N° 116/2020, se reanudó el curso de los plazos de los sumarios administrativos a partir del 30 de noviembre de 2020. Ello, en virtud del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 297/2020 y sucesivamente prorrogado a través de los DNU Nros. 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 577/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020, 754/2020, 794/2020, 814/2020 y 875/2020.

Que con fecha 7 de junio de 2021 se abrió la causa a prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Resolución UIF N° 111/2012 (fs. 1614/1616).

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Resolución UIF N° 111/2012, se citó a prestar declaración a [REDACTED] a la audiencia fijada para el día 24 de junio de 2021.

Que a fs. 1618 luce el acta en la que se dejó constancia de la incomparecencia del Sr. [REDACTED] A la audiencia fijada al efecto.

Que, atento a la prueba ofrecida por el sumariado, se resolvió lo siguiente: (i) en relación con la prueba documental, se la tuvo por presentada; y (ii) en relación con la prueba informativa, la Instrucción dispuso desestimarla por resultar inconducente, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 primer párrafo de la Resolución UIF N° 111/2012.

Que con fecha 21 de julio de 2021, previa certificación de la prueba, se dio por concluido el periodo probatorio y se corrió traslado al sumariado a fin de que presente alegatos (fs. 1621).

Que con fecha 4 de agosto de 2021 se agregó, a fs. 1624/1625, el alegato presentado por el sumariado a través de su apoderado el Dr. Ramiro Saravia, el que a fs. 1626 se tuvo por presentado en tiempo y forma.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Resolución UIF N° 111/2012, con fecha 12 de noviembre de 2021 se dispuso el pase de las actuaciones a la elaboración del Informe Final (fs. 1627).

Que finalmente, con fecha 26 de noviembre de 2021, se procedió a llevar a cabo la providencia de control a los fines de evaluar el cumplimiento formal de las etapas del procedimiento sumarial previsto en la Resolución UIF N° 111/2012 (fs. 1628).

Que previo al análisis de los cargos, corresponde dar tratamiento a los planteos interpuestos por el sumariado.

Que el sumariado solicitó en el escrito de descargo que se declarara la nulidad del acto administrativo que dispuso la instrucción del sumario, manifestando que *“el proceso está plagado de vicios, arbitrariedades y nulidades que luego de ser analizadas todas en su conjunto, claramente tenían la intención de cuestionar la operación de venta realizada al [M. de F.V.]”* y que *“los requerimientos y nivel de exigencias reclamado por la UIF superan los establecidos en las leyes y en muchos casos la razonabilidad que amerita este tipo de procesos”*.

Que, a su vez, el sumariado expuso que: *“(…) El anexo II de la Resolución UIF N° 229/14 establece que la orden de inspección In Situ debe ser firmada por el Presidente de la UIF. Sin embargo, sin que hubiera existido delegación por parte del presidente de la Unidad, la Directora de Supervisión dio inicio en forma irregular a este proceso, el cual se encuentra por tal motivo viciado”* y que *“(…) Ello no es un mero vicio formal o de autoridad eventualmente subsanable, sino una medida que esconde un vicio aun mayor, la clara existencia de la arbitrariedad en la elección del Escribano SENILLOSA como sujeto obligado a ser investigado”*.

Que, por último, el sumariado expresó que: *“(…) como demostraremos, el proceso vulnera gravemente los principios de inviolabilidad de defensa en juicio y debido proceso derivados de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional”*.

Que en lo tocante al planteo efectuado por el sumariado, corresponde señalar que de acuerdo a lo previsto en el artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad.

Que a la luz del precepto normativo citado *supra*, se presume que la actividad de la Administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico y que tal situación subsiste en tanto no se declare lo contrario por vía del órgano competente (Conf. CSJN: “Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c/ Banco de la Nación Argentina s/ Juicio de Conocimiento”, sentencia del 20/08/1996; y C.N.A.C.A.F, Sala IV: “Biondi, Graciela J. c/ Caja de Retiro,

Jubilaciones y Pensiones Fed. – res. 324/1995”, sentencia del 19/06/1996, entre otros).

Que la vigencia de este principio deviene indispensable para el normal desarrollo de las tareas de la Administración puesto que, de no existir, toda la actividad estatal podría ser cuestionada con la posibilidad de justificar la desobediencia como regla normal en el cumplimiento de los actos administrativos, obstaculizando el cumplimiento de los fines públicos como consecuencia de anteponer el interés individual y privado al interés de la comunidad, sin atender a la preponderancia que aquellos representan como causa final del Estado (conf. Cassagne, Juan Carlos: “Derecho Administrativo”, Tomo II, Capítulo I, Abeledo-Perrot, 7ma Edición Actualizada).

Que asimismo corresponde, en la especie, la aplicación del principio de conservación de los actos jurídicos - consagrado jurisprudencialmente y por la PTN- y de reglas rectoras en materia de nulidades, tales como que el interés en su declaración está limitado por el perjuicio causado por el acto que se pretende inhábil -lo que hace inadmisibles la nulidad por la nulidad misma- y que su interpretación debe ser necesariamente restrictiva y favorable a la subsistencia y validez del acto atacado (Dictamen PTN 195:77).

Que, por otra parte, cabe tener en cuenta que a través de la Resolución de Instrucción a la que se arribó como consecuencia de un procedimiento de verificación, no se impuso sanción alguna sino que, por el contrario, a través de la referida Resolución de Instrucción se dio inicio a un procedimiento sumarial previsto a efectos de que el particular pueda ofrecer sus defensas respecto de los hechos que le fueron imputados.

Que no se configuran en el caso los supuestos de violación de normativa alguna ni a la garantía de defensa en juicio o perjuicio concreto para el sumariado, o razones de interés público que justifiquen controvertir y desechar la presunción de legitimidad de la que goza el acto atacado, conferida por el artículo 12 de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias.

Que, al respecto, corresponde tener presente lo dictaminado sobre este tipo de procedimientos por la Procuración del Tesoro de la Nación: *“La sola disposición de instruir un sumario no constituye agravio suficiente desde que durante su sustanciación se ofrecerá la oportunidad de esclarecer todos los hechos y circunstancias a favor de la Administración y de los propios interesados de los denunciantes y presuntos implicados (...) La decisión de instruir sumario no es susceptible de ser recurrida conforme la doctrina anterior citada en “Dictámenes” 110:34, pues dicho acto no puede afectar derecho o interés legítimo ya que solo habilita para verificar hechos y recién luego del llamado a prestar declaración indagatoria, el trámite se endereza hacia un sujeto determinado. Por su parte, una citación efectuada con ese alcance tampoco resultaría impugnabile, porque integra las amplias y discrecionales facultades investigatorias.”* (Dictámenes: 99:146; 159:113).

Que en este sentido, el hecho de ser sometido al procedimiento sumarial es parte de la carga que tienen los sujetos obligados y determinados directivos ante las leyes y normativa sobre PLA/FT por la actividad que realizan y los cargos que ocupan y, así, el acto administrativo que ordena la apertura de un sumario no constituye una sanción en sí mismo.

Que en tales circunstancias nos enfrentamos, por tanto, a un planteo de nulidad por la nulidad misma que, como tal, debe ser rechazado.

Que en el caso en estudio cabe mencionar que el sumariado ha podido conocer los hechos imputados, ofrecer descargo y producir prueba, es decir que ha podido conocer los hechos indilgados y ello conforme se desprende del extenso descargo presentado.

Que en relación al planteo respecto de la Resolución UIF N° 229/2014, cabe mencionar que no existió violación alguna a lo prescripto por la misma, pues el procedimiento ha sido iniciado tal como indica la Resolución mencionada.

Que así las cosas, el inciso 7) del artículo 14 de la Ley N° 25.246 faculta a la UIF para disponer la implementación de sistemas de contralor interno para las personas a que se refiere el artículo 20 de aquella (los Sujetos Obligados), el establecimiento de los procedimientos de supervisión, fiscalización e inspección *in situ* para el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de dicha ley y de las directivas e instrucciones dictadas conforme las facultades del artículo 14 inciso 10) de la misma.

Que, por su parte, la Resolución UIF N° 229/2014 establece: *“Art. 3°.- Apruébese como Anexo III de la presente, denominado: “REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS Y POR LA NORMATIVA DICTADA POR ESTA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, POR PARTE DE TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y MODIFICATORIAS”.*

Que asimismo el artículo 2° del referido Anexo III establece: *“ARTICULO 2°.- Procedimiento de Verificación. Los procedimientos de Verificación se realizarán mediante misivas dirigidas a los Sujetos Obligados, con el fin de verificar el cumplimiento de obligaciones puntuales. A esos fines, la Dirección de Supervisión de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA podrá efectuar requerimientos e intimaciones. Asimismo, en aquellos procedimientos en los que resulte necesario, agentes de la Dirección de Supervisión podrán hacerse presentes en el domicilio del Sujeto Obligado.”*

Que todo lo descripto ha sido acabadamente cumplimentado en estas actuaciones, por lo que el procedimiento cuenta con plena validez.

Que finalmente, cabe recordar al sumariado las facultades de inspección y sanción -entre otras- con las que cuenta la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, respecto de sujetos obligados enmarcadas en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

Que a mérito de lo expuesto, resulta evidente que el planteo del sumariado carece de todo asidero jurídico.

Que en relación al planteo relacionado con la inconstitucionalidad del artículo 24 de la Ley N° 25.246, el sumariado sostiene que la aplicación de toda pena o sanción debe tener una relación razonable con la infracción o falta generadora de la aplicación de tal sanción, en virtud del conocido “principio de proporcionalidad”.

Que a su vez, el sumariado expresó, que el principio de proporcionalidad debe ser siempre respetado y considerado al estimar la pena a aplicar en relación con la conducta cuestionada.

Que, por último, el sumariado esbozó que el vicio del acto irrazonable afectado por el exceso de punición trae aparejada la nulidad absoluta del acto, careciendo por ello de efectos en el universo jurídico, desde su propio nacimiento.

Que corresponde destacar que en nuestro sistema jurídico el control de constitucionalidad de las leyes (tanto formales como materiales) es de carácter judicial y difuso, lo que implica que dicho control se realiza exclusivamente dentro de la esfera de la administración de justicia (Bidart Campos, Germán J.: “Manual de la Constitución Reformada”, Tomo I, Capítulo V, Quinta reimpresión).

Que en dicha línea, la CSJN ha dicho que: *“es claro que, cualesquiera sean las facultades que corresponde reconocer al poder administrador para dejar sin efecto actos contrarios a las leyes, no cabe –sin embargo– admitir que sea de su resorte declarar la inconstitucionalidad de éstas. Ello así, porque aceptar semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es, en última instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por lo órgano legislativo...”* (Fallos 269:243).

Que, excepcionalmente, se ha admitido que la Administración se abstenga de aplicar una norma que se encuentre en manifiesta contravención con el texto constitucional sólo en aquellos casos en que la tacha de inconstitucionalidad haya sido declarada previamente en sede judicial y que presenten tal similitud que no exista ninguna diferencia apreciable entre el marco fáctico y jurídico del precedente judicial (Dictamen PTN 300:158) o en aquellos casos en que las diferencias entre los casos resulten jurídicamente intrascendentes (Dictamen PTN 298:207).

Que tal como puede apreciarse del análisis de las actuaciones no puede afirmarse que alguna de esas situaciones se encuentre presente en el caso.

Que por ello, el planteo referido a la inconstitucionalidad del artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias debe ser rechazado.

Que, a continuación, se procederá al análisis de los cargos imputados y a fin de resguardar los datos de los clientes se procederá a su identificación a través de sus iniciales.

Que en relación con la imputación vinculada a la **política de identificación y conocimiento del cliente**, la Instrucción tuvo por acreditado el cargo en infracción a los artículos 7° incisos i) y j), 8° incisos b), g), h) y j), 9° inciso d), 10 y 13 inciso g) de la Resolución UIF N° 21/2011 y por no acreditado el inciso f) del artículo 7° de la Resolución UIF N° 21/2011.

Que, para arribar a dichas conclusiones, en primer lugar destacó que en la Resolución de Instrucción se imputó: *“...1. Identificación y conocimiento del cliente. 1.1 Integración y actualización de legajos: de acuerdo a una muestra compuesta por VEINTISIETE (27) legajos de clientes, la Dirección de Supervisión remarcó los siguientes faltantes: a) P.S.C.S.A.: el legajo no contaba con número de teléfono de la sede social, la dirección de correo electrónico, ni los números de teléfono y correo electrónico de E. M. y A. M. directores de la sociedad. b) M. H. L. Y T. S.A.: el legajo no contaba con fecha y número de inscripción registral, número de teléfono de la sede social, dirección de correo electrónico, ni los números de teléfono y correo electrónico de P. M. y S. M., directores de la sociedad. c) G. S.R.L.: el legajo no contaba con fecha y número de inscripción registral, número de teléfono de la sede social, ni dirección de correo electrónico. d) A. S.R.L.: el legajo no contaba con fecha y número de inscripción registral, número de teléfono de la sede social, dirección de correo electrónico, ni el número de teléfono y correo electrónico de E. D., representante de la sociedad. e) A. S.A.: el legajo no contaba con el número de teléfono de la sede social, dirección de correo electrónico, ni los números de teléfono y correo electrónico de F.M.N. y F.H.B., directores de la sociedad. f) R.B. S.A.: el legajo no contaba con fecha y número de inscripción registral, número de teléfono de la sede social, dirección de correo electrónico, ni los números de teléfono y correo electrónico de F. G.P. y C. P., directores de la sociedad. g) F. S.R.L.: el legajo no contaba con número de teléfono de la sede social, dirección de correo electrónico, ni los números de teléfono y correo electrónico de J.Y. y D. B., autoridades de la sociedad. h) M. DE F.V.: el legajo no contaba el número de teléfono de las autoridades/representantes (J.P. y A.J.). Asimismo, se advirtió que la documentación aportada resulta ser copias de documentos oficiales, los cuales no se encuentran suscriptas por las autoridades de la Municipalidad. i) P.I. S.A.: el legajo no contaba con copia del último balance auditado por contador público y legalizado por el*

Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda, documentación respaldatoria del origen ilícito de los fondos, atento a que la operación superaba el monto que indicaba la norma en la fecha en que se realizó la misma (PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL (\$2.200.000), ni el número de teléfono y correo electrónico de P.M., director de sociedad. j) J.H.B.: el legajo no contaba con la profesión, oficio, industria, comercio, que constituya su actividad principal. Asimismo, en lo que refiere al apoderado, se constató que no contaba con la fecha y lugar de nacimiento, número de teléfono, dirección de correo electrónico ni la actividad principal que realiza. k) M.F. S.A.: el legajo no contaba con número de teléfono de la sede social, dirección de correo electrónico, copia del último balance auditado por contador público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda, ni el Lugar de nacimiento de J. B.D y M.P, R.B, M.R y O.R; y la actividad principal que realiza O. R., todos directores de la sociedad. Asimismo, se constató la ausencia de la copia del poder otorgado a los apoderados M.P, R.B y M.R. l) B.M. S.A.: el legajo no contaba con número de teléfono de la sede social, dirección de correo electrónico, actas certificadas del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma copia del último balance auditado por contador público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda, declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigente en materia de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, ni el lugar de nacimiento de G.A, R.C.Q y F.F, el CUIT de R.C; el domicilio real de R.C.Q y F.F; el número de teléfono, correo electrónico y actividad principal que realiza G.A, R.C.Q, O.R y F.F, todos directores de la sociedad. Asimismo, no se encuentra agregada al legajo la copia del poder mediante el cual representan a la entidad bancaria R. C.Q y F.F. m) B.F. S.A.: el legajo no contaba con número de teléfono de la sede social; la dirección de correo electrónico, copia del último balance auditado por contador público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda, el número de teléfono, correo electrónico y actividad principal que realizan F.L. y H.M., directores de la sociedad. Tampoco contaba con la declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de PLA/FT. n) M.R.: el legajo no contaba con su número de teléfono ni dirección de correo electrónico. ñ)) M.R.: el legajo no contaba con el número de teléfono y dirección de correo electrónico, ni la profesión, oficio, industria, comercio, que constituya su actividad principal. o) D. S.A.: el legajo no contaba con la copia del último balance auditado por contador público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda. p) M.H.V S.A.: el legajo no contaba con la copia del último balance auditado por contador público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda. q) E.R.N.: el legajo no contaba con la profesión, oficio, industria, comercio, que constituya su actividad principal. Que asimismo, se detectó la ausencia del número de teléfono, correo electrónico y actividad principal que realiza el apoderado P.N. r) F.V. S.A.: el legajo no contaba con número de teléfono de la sede social, dirección de correo electrónico, copia del último balance auditado por contador público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda, documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos, atento a que la operación superaba el monto que indicaba la norma en la fecha en que se realizó la misma (PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL (\$2.200.000), ni el número de teléfono y dirección de correo electrónico de L.W, directora de la sociedad. s) B.M.E: el legajo no contaba con documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos, atento a que la operación superaba el monto que indicaba la norma en la fecha en que se realizó la misma (PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL \$2.200.000). t) J.P.B: el legajo no contaba con su número de teléfono y dirección de correo electrónico ni profesión, oficio, industria, comercio, que constituya su actividad principal. u) O. S.A.: el legajo no contaba con número de teléfono de la sede social, dirección de correo electrónico, copia del último balance auditado por contador público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda ni el número de teléfono y dirección de correo electrónico de M.G., director de la sociedad. v) D.G y K.L: los legajos no contaban con número de teléfono y dirección de correo electrónico ni documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos. w) G.A.R: el legajo no contaba con número de teléfono ni dirección de correo electrónico.

Que estos hechos, en principio, configurarían incumplimientos a lo dispuesto en los artículos 7° inciso f), i), j) y k), 8° inciso b), g), h), j) y k), 9° inciso d), 10 y 13 inciso g) de la Resolución UIF N° 21/2011”.

Que la Resolución UIF N° 21/2011 establece: “Artículo 7° Datos a requerir a Personas Físicas. Los sujetos obligados, sin perjuicio de observar las reglas generales para la identificación de los requirentes impuestas por el Código Civil y las respectivas leyes orgánicas, deberán recabar de manera fehaciente, como mínimo, en el caso de personas físicas la siguiente información: (...) f): “Número y tipo de documento de identidad que deberá exhibir en original. Se aceptarán como documentos válidos para acreditar la identidad, el Documento Nacional de Identidad, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento o Pasaporte; i): “Número de teléfono y dirección de correo electrónico; j): “Profesión, oficio, industria, comercio, que constituya su actividad principal, indicando expresamente si reviste la calidad de Persona Expuesta Políticamente; k): “Declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos cuando las transacciones superasen la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL (\$200.000). Si las transacciones superasen la suma de PESOS QUINIENTOS MIL (\$500.000), se requerirá adicionalmente a la declaración jurada de licitud y origen de los fondos, la correspondiente documentación respaldatoria”.

Que el artículo 8° de la Resolución UIF N° 21/2011 establece: “Datos a requerir a Personas Jurídicas. Los sujetos obligados sin perjuicio de observar las reglas generales para la identificación de las requirentes impuestas por el Código Civil y las respectivas leyes orgánicas, deberán determinar de manera fehaciente, como mínimo, en el caso de personas jurídicas (...) b): “Fecha y número de inscripción registral; g): “Número de teléfono de la sede social, dirección de correo electrónico y actividad principal realizada; h): “Actas certificadas del órgano decisorio autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma social; i): “Datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados o autorizados con uso de firma, que actúen en nombre y representación de la persona jurídica, conforme los puntos a) a j) del artículo 7; j): “Copia del último balance auditado por contador público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda; k): “Declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos cuando las transacciones superasen la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL (\$200.000). Si las transacciones superasen la suma de PESOS QUINIENTOS MIL (\$500.000), se requerirá adicionalmente a la declaración jurada de licitud y origen de los fondos, la correspondiente documentación respaldatoria”.

Que el artículo 9° de la Resolución UIF N° 21/2011 establece: “Datos a requerir a Organismos Públicos. Los sujetos obligados, sin perjuicio de observar las reglas generales para la identificación de los clientes o requirentes impuestas por el Código Civil y las respectivas leyes orgánicas deberán requerir, como mínimo, en el caso de organismos públicos: d: CUIT (código único de identificación tributaria), domicilio legal (calle, número, localidad, provincia y código postal) y teléfono de la dependencia en la que el funcionario ejerce funciones”.

Que el artículo 10 de la Resolución UIF N° 21/2011 establece: “Datos a requerir de los Representantes. La información a requerir al apoderado, tutor, curador o representante legal deberá ser análoga a la solicitada al requirente y a su vez presentar el correspondiente poder, del cual se desprenda el carácter invocado, en copia debidamente certificada”.

Que el artículo 13 de la Resolución UIF N° 21/2011 establece: “Supuestos de Procedimiento Reforzado de Identificación. Los sujetos obligados deberán reforzar el procedimiento de identificación del requirente en los siguientes casos: (...) g): “Al operar con otros Sujetos Obligados –de conformidad con las resoluciones emitidas por esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA para cada uno de ellos, mediante las cuales se reglamentan las obligaciones de las personas físicas y jurídicas enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias- deberán solicitarles una declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, junto con la

correspondiente constancia de inscripción ante esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. En el caso que no se acrediten tales extremos deberán aplicarse medidas de debida diligencia reforzadas”.

Que durante la instancia sumarial, el sumariado expresó que: “los escribanos no consideran a cada operación un legajo sino un acta notarial. Los legajos propiamente dichos son los que surgen de los clientes que ha realizado operaciones. De hecho, no existe una formalidad o un criterio unificado y obligatorio mediante el cual debe establecerse un legajo”.

Que continuando con su descargo el sumariado manifestó: “sin dejar de lado las exigencias normativas que determinan la documentación que debe solicitarse a los clientes, a fin de cumplimentar de forma correcta la política “Conozca su Cliente”, cabe tener presente ciertas particularidades de la actividad notarial” agregando que: “la documentación que se posee -tanto de los clientes personas humanas como jurídicas- demuestra a todas luces que el Esc. SENILLOSA cumple con el deber de diligencia de conocer al cliente llevando adelante todas las acciones que resultan pertinentes para cumplir con la Prevención del LA/FT”.

Que, por otra parte, manifestó que: “estas acciones de control están aplicadas de forma permanente y son las que hacen al control dinámico de las operaciones que se realizan en los clientes, que es definitiva la “piedra angular” de la “Política Conozca a su Cliente”.

Que, siguiendo con el descargo efectuado, el sumariado también se refirió puntualmente a los incumplimientos imputados respecto de los legajos de P.S.C. S.A., M.H.L.Y T. S.A., G. S.R.L., A. S.R.L., A. S.A., R.B. S.R.L. y F. S.R.L., en los cuales se imputó al Sujeto Obligado la falta de datos de la sociedad -como el mail o el número de inscripción-, expresando que “esos datos son inexistentes cuando se forma una sociedad, muchas veces a pesar de la creación de la sociedad las partes no desean avanzar o inscribir por cuestiones personales o monetarias”.

Que en lo que respecta al legajo de M.F.V., manifestó el sumariado que: “la documentación original tenida a la vista y aportada resultan ser copias fieles de documentos oficiales, las que se encuentran debidamente certificadas por las autoridades municipales correspondientes referidas a Documento Nacional de Identidad del Sr. J. C.P, Documento Nacional de Identidad de A.J, el Decreto N° 1480/15 en el cual se designa como Director Ejecutivo del Instituto para el Desarrollo del Agrupamiento Industrial de F. V. y la Ordenanza del Honorable Consejo Deliberante de F. V. a que convalida el referido decreto, todos ellos fueron suscriptos por el Director General de Administración Instituto para el Desarrollo del Agrupamiento Industrial F. V.”.

Que en relación al legajo de P.I. S.A., manifestó: “La documentación referida a los socios y al origen de los fondos se encontraba agregada en carpetas relacionadas a F.P. que es el cliente principal de la escribanía (...)”

Que en lo que respecta al legajo de J.H.B. manifestó que “se acompañó la documental faltante durante la instancia sumarial”.

Que, en relación al legajo de M.F. S.A., el sumariado expresó que: “es una sociedad supervisada, regulada, inspeccionada y fiscalizada en forma directa por la Comisión Nacional de Valores (...). A su vez acompañaron durante la instancia sumarial, copias de los estados contables al 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015. Respecto de los datos personales de J.P.B.D y R.B fueron acompañados durante la instancia sumarial, respecto del Sr. M.P manifestó el sumariado, que sus datos personales obran a fs. 16, como así también los datos personales del Sr. M.R. a fs. 551 todo de las presentes actuaciones. Respecto a las copias de los poderes otorgados en carácter de apoderados del Sr. M.P. fue oportunamente agregado a fs. 556/567, con relación a los Sres. R.B y M. R. los referidos poderes se hallan acompañados a fs. 449 vta. y fs. 450”.

Que con respecto al legajo del B.M. S.A. los sumariados expresaron que: *“respecto al incumplimiento referido a la no presentación de la copia de los últimos balances, los mismos fueron aportados a fs. 556/567”*.

Que con relación a la falta de actas certificadas designando autoridades, expresaron que: *“no existe la falta, sino que todas las inscripciones de autoridades ante la Inspección General de Justicia, como así también todos los poderes fueron otorgados ante Registros Notariales de actuación de [REDACTED] A como escribano autorizante desde el año 2003 a la fecha”*.

Que, con relación al legajo de E.R.N., durante la instancia sumarial el sumariado denunció el número de teléfono respecto de la persona humana requerida.

Que en lo que concierne al legajo de F.V. S.A., durante la instancia sumarial el sumariado denunció su número de teléfono y correo electrónico, y, a su vez, respecto a la justificación de la licitud de fondos cuya operación superaba al monto de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL (\$ 2.200.000) que indicaba la norma, manifestó que: *“del texto de la escritura 249 de fecha 22 de junio de 2016 obrante a fs. 379/381 surge que el pago íntegro del precio de compraventa fue bancarizado, la parte compradora a través de transferencia abono a la cuenta de titularidad de la parte vendedora, dicha constancia de transferencia obra a fs. 401, sin perjuicio de ello se acompaña como Anexo 12 copias de la certificación Especial Origen de Fondos Invertidos en la operación de compraventa objeto de la verificación, efectuada por Contador Público y legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chaco”*.

Que en lo que respecta al legajo de B.M.E., en cuanto a la falta de documentación respaldatoria del origen ilícito de los fondos atento a que la operación superaba los PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL (\$2.200.000), el sumariado manifestó que *“a fs. 402/410 de las presentes actuaciones respecto del precio de venta de U\$S 200.000 la suma de U\$S fue pagada en el acto y la suma de U\$S 182.000 fue cancelada mediante transferencia bancaria”*.

Que en relación al legajo de J.P.B. durante la instancia sumarial se acompañó el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y la profesión.

Que, por su parte, con respecto a los legajos de O. S.A., M.G. y G.A.R., durante la instancia sumarial el sumariado acompañó sus números de teléfono y la dirección de correo electrónico.

Que en lo que concierne a la falta de copia del último balance de O. S.A., el sumariado manifestó que *“el mismo obra en las presentes actuaciones a fs. 458/460”*.

Que con relación a los legajos de D.G. y K.L., también se acompañaron durante la instancia sumarial el número de teléfono y la dirección de correo electrónico y, en lo que respecta a la documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos, el sumariado acompañó las certificaciones contables sobre Declaración Jurada de Origen Lícito de los Fondos para afectar a la compra del 50% del inmueble tanto del comprador D. G. y A.C., cónyuges entre sí y adquirentes del inmueble en condominio y por partes iguales.

Que como antecedente del cargo en análisis, se señala que esta UIF llevó a cabo dos supervisiones con fechas 2 de marzo de 2017 y 3 de marzo de 2017, enviando también una nota de requerimiento de fecha 24 de abril de 2017 donde fueron solicitados los siguientes legajos: P.S.C. S.A., obrante a fs. 15/21; M. H.L. Y T. S.A., obrante a fs. 22/31; G. S.R.L., obrante a fs. 32/43; A. S.R.L., obrante a fs. 44/50; M. DE F.V., obrante a fs. 51/90; P.I. S.A., obrante a fs. 91/103; J.H.B., obrante a fs. 104/154 y fs. 568/603; M. F. S.A., obrante a fs. 155/202, fs. 291/300, fs. 421/435, fs. 554/567 y fs. 604/631; B.M. S.A., obrante a fs. 203/211, fs. 311/317, fs. 350/368 y fs.

632/954; B.F. S.A., obrante a fs. 212/238; M.R., obrante a fs. 239/248 y fs. 538/553; R.M., obrante a fs. 249/268 y fs. 955/971; D. S.A., obrante a fs. 262/286, fs. 461/470 y fs. 493/509; M. S.A., obrante a fs. 318/349; A. S.A., obrante a fs. 369/378; F.V.S.A., obrante a fs. 379/381, fs. 391/401; E.R.N., obrante a fs. 382/390; B.M.E., obrante a fs. 402/420; R.B. S.A., obrante a fs. 436/444; O. S.A., obrante a fs. 445/460, fs. 471/472, fs. 474, fs. 476/492; D.G., K.L. y G.A.R., obrantes a fs. 510/525; y F. S.R.L., obrante a fs. 526/534.

Que, sentado ello, cabe señalar que el cargo de marras encuentra respaldo en las conclusiones arribadas en los informes finales efectuados por la Dirección de Supervisión (fs. 972/980) y (fs. 985/990).

Que se detalla en forma individual cada uno de los incumplimientos respecto de las personas físicas:

Que en relación a la falta de número y tipo de documento de identidad, en infracción al artículo 7º inciso f) de la Resolución UIF N° 21/2011, es de destacar que la Instrucción verificó que todos los legajos cumplen el requisito normativo y, en consecuencia, aconsejó tener el cargo por no acreditado.

Que respecto de la falta de número de teléfono y dirección de correo electrónico, en infracción al artículo 7º inciso i) de la Resolución UIF N° 21/2011, la omisión se constató respecto de los legajos correspondientes a las siguientes personas físicas: M.R., M.R., J.P.B., D.G., K.L., y G.A.R., J.H.B y E.R.N, por lo que dicho cargo encuentra acreditado en OCHO (8) legajos sobre una muestra total de VEINTISIETE (27).

Que respecto del incumplimiento atribuido por falta de datos referidos a la profesión, oficio, industria, comercio que constituya su actividad principal, indicando expresamente si reviste la calidad de Persona Expuesta Políticamente, en infracción al artículo 7º inciso j) de la Resolución UIF N° 21/2011, la omisión se constató respecto de los legajos correspondientes a las siguientes personas humanas: J.H.B., M.R., E.R.N. y J.P.B.

Que en lo concerniente a dicho cargo el mismo se halla acreditado, detectando el faltante en CUATRO (4) legajos sobre una muestra total de VEINTISIETE (27) legajos

Que en lo referido a personas jurídicas, se detectaron los siguientes incumplimientos, en relación a falta de fecha y número de inscripción registral, en infracción al artículo 8º inc. b) de la Resolución UIF N° 21/2011, respecto de los legajos correspondientes a los siguientes legajos: M.H.L.Y T. S.A y R.B. S.A.

Que en lo que concierne a los legajos de G. S.R.L. y A. S.R.L., la Instrucción consideró que el cargo no se hallaba acreditado, ya que la documentación respaldatoria consta a fs. 32 y 44 de las presentes actuaciones.

Que, como conclusión, la Instrucción concluyó que se halla acreditado en DOS (2) legajos sobre una muestra total de VEINTISIETE (27).

Que por otra parte, con respecto a la falta de número de teléfono de la sede social y dirección de correo electrónico en infracción al artículo 8º inc. g) de la Resolución UIF N° 21/2011, la omisión se constató en los legajos de P.S.C. S.A., M.H.L.Y T. S.A., G. S.A., A. S.R.L., A. S.A., R.B. S.A., F. S.R.L., M.F. S.A., B.M. S.A., B.F. S.A., M.H.V. S. A., F.V. S.A. y O. S.A, por lo que la Instrucción consideró que el cargo se encuentra acreditado en TRECE (13) legajos sobre una muestra total de VEINTISIETE (27).

Que en lo tocante a la falta de actas certificadas del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma social, en infracción al artículo 8º inc. h) de la Resolución UIF N° 21/2011, la omisión se constató respecto del legajo de B.M. S.A. y la Instrucción consideró que el cargo se encuentra acreditado en UN (1) legajo sobre una muestra total de VEINTISIETE (27).

Que la omisión se constató respecto de los legajos correspondientes a las siguientes personas jurídicas: P. S.C. S.A., respecto de sus apoderados E.M Y A. D.M; M.H.L. Y T. S.A. respecto de sus apoderados P.G.M, y S.C.M; G. SRL respecto de sus autoridades/representantes, E. A y F. P; A. S.R.L. respecto de E.I.D. y M.D.I.A.C; A. S.A respecto de sus apoderados F.H.B y F.M.N; R.B S.A. respecto de sus apoderados F.L.F.P Y C.G.P; F. S.R.L., respecto de sus apoderados D.C.B y J.A.Y; M.F.V. respecto de las autoridades/representantes J. P y A.J; P.I. S.A. respecto de su apoderado P.M.; M. F. S.A. respecto de sus directores J.P.B.D, M.P, R.B, M.R. y respecto de sus apoderados M.P., R.B Y M.R; B.M. S.A. respecto de sus directores G.A, F.F, R.C.Q, O.R y respecto de sus apoderados R.C.Q Y F.F; B.F. S.A. respecto de sus directores F.L. y H.M.; F.V. S.A respecto de su directora L.W.

Que, por ello, la Instrucción encontró acreditado dicho cargo en TRECE (13) legajos sobre una muestra total de VEINTISIETE (27).

Que en lo atinente a la falta de copia del último balance, auditado por contador público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en incumplimiento al artículo 8 inc. j) de la Resolución UIF N° 21/2011, la omisión se constató respecto de los legajos correspondientes a P.I. S.A., M.F. S.A., B.M. S.A., B.F. S.A., D. S.A., M. S. A., F.V. S.A. y O. S.A, por lo que la Instrucción consideró que dicho cargo se encuentra acreditado en OCHO (8) legajos sobre una muestra total de VEINTISIETE (27).

Que por otra parte, en relación a la falta de declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, junto con la correspondiente constancia de inscripción ante esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, en incumplimiento al artículo 13 inciso g) de la Resolución UIF N° 21/2011, la omisión se constató respecto de los legajos correspondientes a B.M. S.A. y M.F. S.A, por lo que la Instrucción concluyó que dicho cargo se encuentra acreditando en DOS (2) legajos sobre una muestra total de VEINTISIETE (27).

Que, en lo referido a Organismos Públicos respecto de la falta de datos a requerir a Organismos Públicos en incumplimiento al artículo 9° inc. d) de la Resolución UIF N° 21/2011, la omisión se constató respecto del legajo correspondiente a M.F.V.

Que durante la instancia sumarial el apoderado del sumariado acompañó la información relativa a uno de los cargos imputados, como lo era el de informar el número de teléfono de las autoridades/representantes, pero más allá de la documental acompañada por el sumariado, la Instrucción consideró que el cargo se encuentra acreditado ante el faltante que se detectó en UN (1) legajo sobre una muestra total de VEINTISIETE (27).

Que en relación a la falta de datos a requerir de los Representantes, en incumplimiento al artículo 10 de la Resolución UIF N° 21/2011, dicha omisión se constató respecto del legajo correspondiente a M. F.V., en relación a sus autoridades J.P. y A.J.

Que si bien en el descargo el sumariado hace referencia a que la documentación se encontraba debidamente certificada por las propias autoridades del municipio, lo cierto es que según el Informe de la Dirección de Supervisión de esta UIF se trata solo de copias de documentos oficiales sin hallarse suscriptos por las autoridades municipales.

Que conforme ello y en lo concerniente a dicho cargo, la Instrucción concluyó que el cargo se encuentra acreditado en UN (1) legajo sobre una muestra total de VEINTISIETE (27).

Que por todo lo expuesto, la Instrucción aconseja la sanción de multa de PESOS CIEN MIL (\$100.000) en

infracción artículos 7º incisos i) y j), 8º incisos b), g), h) y j), 9º inciso d), 10 y 13 inciso g) de la Resolución UIF N° 21/2011.

Que en relación a la imputación vinculada a la **falta de documentación respaldatoria**, la Instrucción tuvo el cargo por acreditado en infracción a los artículos 7º inciso k) y 8º inciso k) de la Resolución UIF N° 21/2011.

Que se analizó la falta de documentación respaldatoria cuando las operaciones superasen el monto de PESOS DOSCIENTOS MIL (\$200.000), y la falta de solicitud de declaración jurada de licitud y origen de los fondos en el caso que superasen la suma de PESOS QUINIENTOS MIL (\$500.000) en infracción al artículo 7º inc. k) de la Resolución UIF N° 21/2011.

Que el cargo de marras encuentra respaldo en las conclusiones arribadas en los informes finales efectuados por la Dirección de Supervisión de esta UIF (fs. 972/980 y fs. 985/990).

Que respecto de los clientes personas humanas la omisión se constató en los legajos de los clientes: B.M.E., D.G., y K.L.

Que, al momento de efectuar el descargo y respecto del legajo de B.M.E., el sumariado manifestó que solo bastaba con presentar el formulario de Régimen de Sinceramiento Fiscal Ley N° 27.260 expedido por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

Que, en lo que respecta al legajo de D.G., durante la instancia sumarial se adjuntaron las certificaciones contables sobre la declaración jurada de origen lícito de los fondos para afectar al 50% del inmueble sito en Humboldt 2031 Piso 14 UF 27 de la CABA.

Que, con relación a la falta de documentación respaldatoria respecto del legajo de K.L., el sumariado no hizo referencia a tal imputación.

Que en virtud de ello, la Instrucción concluyó que -más allá de lo manifestado por el sumariado en el descargo y la documentación acompañada- resulta insuficiente con relación a lo exigido por la normativa UIF y conforme al informe elaborado por la Dirección de Supervisión, considerando que el incumplimiento se halla acreditado en TRES (3) legajos sobre una muestra total de VEINTISIETE (27), en infracción al artículo 7º inciso k) de la Resolución UIF N° 21/2011.

Que en relación con la imputación vinculada a la falta de documentación respaldatoria cuando las operaciones superasen la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL (\$200.000) y de PESOS QUINIENTOS MIL (\$500.000) ante la falta de documentación respaldatoria sobre el origen lícito de los fondos, en infracción al artículo 8º inciso k) de la Resolución UIF N° 21/2011, el cargo de marras encuentra respaldo en las conclusiones arribadas en los informes finales efectuados por la Dirección de Supervisión de esta Unidad (fs. 972/980 y fs. 985/990).

Que respecto de los clientes personas jurídicas la omisión se constató en los legajos de: P.I.S.A., B.M.S.A. y B.F.S.A.

Que en lo concerniente a dicho cargo, la Instrucción concluyó que más allá de lo manifestado por el sumariado en el descargo al entender que la normativa "...otorga al Sujeto Obligado la suficiente discrecionalidad para entender cuando la documentación respaldatoria resulta suficiente para considerarla como que cuenta con el respaldo económico y los fondos lícitos suficientes para realizar la operación", la documentación acompañada resulta insuficiente conforme a lo exigido por la normativa UIF y, conforme al informe elaborado por la

Dirección de Supervisión, entendió que el mismo se halla acreditado en TRES (3) legajos sobre una muestra total de VEINTISIETE (27) en infracción al artículo 8º inciso k) de la Resolución UIF N° 21/2011.

Que por todo lo expuesto, la Instrucción aconsejó una sanción de multa de PESOS NOVENTA MIL (\$90.000), por falta de documentación respaldatoria en SEIS (6) legajos sobre VEINTISIETE (27) que conforman la totalidad de la muestra, en infracción a los artículos 7º inciso k) y 8º inciso k) de la Resolución UIF N° 21/2011.

Que en cuanto a la **falta DDJJ PEP**, en infracción a los artículos 7º inciso j) y 8º inciso i) de la Resolución UIF N° 21/2011, la Instrucción tuvo por acreditado el cargo.

Que para arribar a dicha conclusión, la Instrucción tuvo en cuenta que en la Resolución de Instrucción se imputó: *"...1.2. Declaración jurada de Persona Expuesta Políticamente del análisis de los legajos mencionados surge que no se encontraba agregada la declaración jurada indicando la condición de Persona Expuesta Políticamente en los legajos de: J.H.B., R.C.Q., F.F., M.Z. y M.G. Que este hecho, en principio, configuraría un incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 7º inciso j) y 8º inciso i) de la Resolución UIF N° 21/2011".*

Que el cargo de marras encuentra respaldo en las conclusiones arribadas en los informes finales efectuados por la Dirección de Supervisión de esta UIF (fs. 972/980 y fs. 985/990).

Que, al momento de efectuar el descargo, el sumariado no hizo referencia a la mencionada imputación sino que lo hizo *a posteriori* a través de una presentación adicional al descargo principal, en la cual manifestó que el Sr. J.H.B. no era Persona Expuesta Políticamente y, no obstante lo expresado, acompañó durante la instancia sumarial dicha exigencia.

Que respecto de los Sres. R.C.Q. y F.F., el sumariado consideró que no debían ser considerados Personas Expuestas Políticamente aunque, no obstante ello, también acompañó durante la instancia sumarial dicha declaración.

Que en relación al Sr. M.Z., el sumariado argumentó que a fs. 259 vta., de las presentes actuaciones (Escritura Número Doscientos seis - Compraventa. M.F.S.A. a D.S.A.), el Sr. M.Z. declaró no ser Persona Expuesta Políticamente.

Que, por último y respecto del Sr. M.G., el sumariado acompañó durante la instancia sumarial la declaración jurada respecto de la condición de Persona Expuesta Políticamente.

Que, al momento de alegar, el sumariado no hizo referencia respecto al incumplimiento imputado.

Que teniendo en cuenta el descargo efectuado por el sumariado, cabe señalar que la finalidad normativa es que el Sujeto Obligado tenga presente que los clientes que revistan tal calidad se encuentran expuestos, por ejercer una función pública o por administrar fondos que no le pertenecen, a mayores riesgos en materia de PLA/FT y, en virtud de ello, debe efectuar respecto de estos últimos una debida diligencia reforzada.

Que en virtud de todo lo expuesto, la Instrucción consideró que el cargo por falta de declaración jurada de Persona Expuesta Políticamente (PEP), en infracción a lo establecido en los artículos 7º inciso j) y 8º inciso i) de la Resolución UIF N° 21/2011 se halla acreditado en CUATRO (4) legajos sobre una muestra de VEINTISIETE (27) y por ello aconsejó una sanción de multa de PESOS CIEN MIL (\$100.000).

Que en cuanto a la **falta de consulta al listado de terroristas**, la Instrucción tuvo por acreditado el cargo en



infracción al artículo 13 inciso f) de la Resolución UIF N° 21/2011.

Que, para ello, la Instrucción tuvo en cuenta que en la Resolución de Instrucción se imputó: *"1.3. Listado de terroristas y/u organizaciones terroristas: ninguno de los legajos analizados contaba con constancia alguna de la consulta a los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas. Que este hecho, en principio, configuraría un incumplimiento a lo dispuesto en el inciso f) del artículo 13 de la Resolución UIF N° 21/2011"*.

Que, al respecto, la Resolución UIF N° 21/2011 establece: *"Artículo 13. Supuestos de Procedimiento Reforzado de Identificación. Los Sujetos Obligados deberán reforzar el procedimiento de identificación del requirente en los siguientes casos (...) Inciso f): "Personas incluidas en el listado de terroristas: los sujetos obligados deben prestar especial atención cuando la operación o su tentativa involucre a personas incluidas en el listado de terroristas o fondos, bienes u otros activos, que sean de propiedad o controlados (directa o indirectamente) por personas incluidas en el listado de terroristas, debiendo cumplimentar a tales efectos lo establecido por la resolución de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA vigente en la materia"*.

Que el cargo de marras encuentra respaldo en las conclusiones arribadas en los informes finales efectuados por la Dirección de Supervisión de esta UIF (fs. 972/980 y fs. 985/990).

Que, en el momento de ejercer el derecho de defensa, el sumariado manifestó que la consulta de la base de datos se realizaba en forma on-line, no considerando necesario imprimir dichas constancias.

Que al momento de alegar el sumariado no hizo referencia a tal incumplimiento.

Que la exigencia normativa surge a raíz de la importancia mundial que adquirió el terrorismo, lo que llevó a que el GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) incorpore sus Recomendaciones 5, 6 y 8, por las que aconseja a los países que incorporen en sus ordenamientos jurídicos el delito de financiamiento de terrorismo entendiendo por tal toda persona que suministra o recolecta fondos por cualquier medio con la intención de que estos sean utilizados, o a sabiendas que van a utilizados en su totalidad o en parte, para realizar un acto terrorista o para financiar una organización terrorista individual.

Que, en este entendimiento, ha quedado constatado al momento de la supervisión efectuada por esta Unidad y en base a los antecedentes obrantes en las presentes actuaciones, que el escribano [REDACTED] no contaba con la constancia mediante la cual se acredite el efectivo cumplimiento de la obligación exigida por la norma con relación a la totalidad de los legajos que conformaban la muestra, en tanto el sumariado no pudo acreditar haber realizado la consulta en su momento.

Que, por todo ello, y sin perjuicio de la documental acompañada durante la instancia sumarial, el cargo endilgado ha quedado acreditado en VEINTISIETE (27) legajos, en infracción a lo dispuesto en el artículo 13 inc. f) de la Resolución UIF N° 21/2011, por lo que la Instrucción aconsejó la sanción de multa de MULTA DE PESOS CIENTO MIL (\$100.000) por falta de consulta al listado de terroristas y/u organizaciones terroristas.

Que en cuanto al incumplimiento a la política de **Reporte de Operaciones Sospechosas**, la Instrucción lo tuvo por acreditado en infracción al artículo 21 inciso b) de la Ley N° 25.246 y al artículo 19 inciso 1) de la Resolución UIF N° 21/2011.

Que para arribar a dicha conclusión, la Instrucción tuvo en cuenta que en la Resolución de Instrucción se imputó: *"2. Reporte de operaciones sospechosas: la Dirección de Supervisión indico del análisis de la documentación de las operaciones en las que participo el sujeto obligado pudo advertirse lo siguiente: a) Compraventa de fecha*

16/12/2015 a favor de "P.I.S.A." como primera cuestión la citada Dirección informo que, la sociedad se constituyó el 7 de febrero de 2013 (fs. 91) con un capital inicial de PESOS CIEN MIL (\$100.000), representando en acciones ordinarias, nominativas no endosables, las cuales se suscribieron de la siguiente manera: CUARENTA MIL (40.000) acciones por F.P.&A., I.YA.S.A., TREINTA MIL (30.000) acciones por H.J.G.// Que con relación a ello, la Dirección de Supervisión manifestó que del legajo de P.I.S.A. no surgía la composición accionaria de la sociedad anónima con participación mayoritaria (F.P.&A., I.YA.S.A.), es decir, no pudo verificarse el beneficiario final de la misma. Asimismo, señalo que el domicilio que fija en el contrato de compraventa la sociedad P.I.S.A. –Alicia Moreau de Justo N° 2030 2° Piso, Oficina 201, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- resulta ser el mismo en que se encuentra la sede social de la empresa F.P.&A., I.YA.S.A., hecho que, si bien no implicaría un factor de riesgo per se, si debió analizarse en el contexto de la presente operación. //Que por otro lado, y como cuestión relevante, la Dirección de Supervisión explico que con fecha 19 de diciembre de 2012, a través del Decreto Municipal N° 3461/12, la M. de F.V. convoco a un Concurso de Antecedentes y Propuestas a inversores privados interesados en el desarrollo de un parque industrial. Seguidamente, con fecha 25 de julio de 2013, a través del Decreto Municipal N° 2589/13 se seleccionó la propuesta presentada por la firma P.I.S.A., otorgándole la Municipalidad la tenencia precaria del inmueble para la realización de las obras necesarias para el desarrollo del predio. //Que en dicho sentido, cabe resaltar que la sociedad P.I.S.A. se constituyó solo TRES (3) meses antes de la adjudicación, y como fue anteriormente mencionado, con un capital de PESOS CIEN MIL (\$100.000), no constando al momento de la operación documentación alguna respecto de aumentos de capital que pudieran justificar su capacidad económica para llevar adelante el proyecto, siendo que el precio de todo el inmueble se fijó en la suma de PESOS DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL (\$12.705.000) //Que asimismo, una vez realizadas las obras en un determinado porcentaje, la sociedad P.I.S.A. solicito la transmisión de la titularidad dominial de las superficies involucradas, cuya valuación fue de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS (\$5.207.877,80), situación que se encuentra reflejada en la Escritura de compraventa analizada de fecha 16 de diciembre de 2015 (fs. 53/85), sin poder determinarse el origen de los fondos. //Que por todo lo expuesto, la Dirección de Supervisión concluyo que la operatoria descripta fue llevada a cabo sin ningún tipo de mecanismo y/o procedimiento de control por parte del sujeto obligado, el cual con la información que contenía debió avisar que podría tratarse de una empresa pantalla utilizada por personas físicas para realizar la operación. A su vez, también concluyo que existen elementos suficientes como para otorgarle a la operación el carácter de "sospechosa", ello así toda vez que P.I.S.A. no contaba con los antecedentes necesarios para llevar adelante la operación en estudio en virtud de la naturaleza de la misma, y al haber sido creada TRES (3) meses antes de la celebración del contrato que la obligaba a desarrollar la obra. b) Compraventa de fecha 18/02/2015 a favor de D.G. y K.L.: la dirección de Supervisión señalo que si bien la presente operación se realizó por el monto de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL (\$2.300.000), el sujeto obligado considero suficiente la constancia de inscripción ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS del señor D. G. –de la cual surge que se encuentra inscripto como Trabajador Autónomo Categoría T1 Cat. III Ingresos hasta \$15.000- para justificar el origen lícito de los fondos. //Que en dicho sentido, la Dirección de Supervisión determino que los elementos y circunstancias que surgen de la operación permiten afirmar que la misma reúne la condición de "sospechosa", debido a que resulta evidente que el monto de la operación no guarda relacion con los antecedentes y la actividad económica del comprador. //Que estos hechos, en principio, configurarían un incumplimiento a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21 de la Ley N° 25.246 y en el inciso 1 del artículo 19 de la Resolución UIF N° 21/2011".

Que en cuanto a la normativa de aplicación, la Instrucción sostuvo que el artículo 21 de la Ley N° 25.246 establece: "Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidas a las siguientes obligaciones:

(...) b) *"Informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma. A los efectos de la presente ley se consideran operaciones sospechosas aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada".*

Que, por su parte, el artículo 19 de la Resolución UIF N° 21/2011 establece: *"Reporte de Operaciones Sospechosas. Los sujetos obligados deberán reportar, conforme lo establecido en el artículo 21 inciso b) de la Ley N° 25.246 y modificatorias, aquellas operaciones inusuales que de acuerdo a la idoneidad exigible en función de la actividad que realiza y el análisis efectuado, consideren sospechosas de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo (...) Los montos, tipos, frecuencia y naturaleza de las operaciones que realicen los clientes que no guarden relación con los antecedentes y la actividad económica de ellos (...)".*

Que a su vez, al momento del descargo, el sumariado manifestó -en relación a P.I.S.A.- que la documentación referida al origen de los fondos se encontraba agregada en carpetas relacionadas a F.P. y que *"los escribanos conocemos a los clientes de varias operaciones y no guardamos legajos de cada operación, sino que se agregan en función del cliente y de los trabajos que se requieren".*

Que, por otra parte, manifestó que: *"F.P.&A.I.A.S.A. (...) es cliente de la Escribanía desde el año 2008".*

Que siguiendo con el descargo, el sumariado esbozó: *"asimismo, como resulta habitual, en la Escribanía se encuentra Actas de directorio y de asambleas que les eran entregadas a la Escribanía para que gestionara la inscripción en la IGJ", y que "de la documentación no solo se advierte que el Escribano Senillosa conocía perfectamente a la sociedad F.P.&A.I.A.S.A. sino que conocía perfectamente su actividad normal y lícita y el nombre de sus socios".*

Que en relación al cargo imputado, el sumariado expresó: *"P.I.S.A. es una sociedad vinculada a F.P.&A.I.A.S.A., conforme lo dispone el artículo 33 de la ley de sociedades (Ley 19.550). Asimismo, dado que el porcentaje de F.P.&A.I.A.S.A. sobre P.I.S.A. es del 40%, podría considerarse que ejerce sobre la misma cierto control".*

Que siguiendo con su descargo, el sumariado manifestó que *"el escribano no tiene autoridad ni elementos para cuestionar o dudar sobre la legitimidad de los actos jurídicos ni los documentos públicos realizados por un organismo estatal, MUCHO MENOS puede cuestionar su oportunidad y conveniencia respecto si P.I.S.A. tenía o cumplía con las prerrogativas de la licitación"; como también que "Las cuestiones financieras relacionadas con la obra específicamente son ajenas al escribano, quien participo de la compraventa 2 años y 4 meses después de que se otorgó la tenencia precaria".*

Que a su vez, el sumariado manifestó que: *"las imputaciones son falsas y no tienen sustento factico. En primer lugar, en la misma escritura se deja constancia que la operación se realizó mediante la entrega de dos cheques Nro. 69883427 por la suma de \$3.707.877,80 y otro identificado con el N° 43525774 por la suma de \$1.500.000, ambos con fecha de pago el 16 de diciembre de 2015 y librados por la parte Compradora contra las cuentas corrientes de su titularidad números 244-003472/2 abierta en el banco Credicoop y 3-302-0941056927/5 abierto en el banco Macro, los cuales fueron cobrados conforme la nota marginal de recibo en la misma Escritura 765 del 16 de diciembre de 2015 obrante a fs. 153 del presente expediente".*

Que, asimismo, expresó que *"no existió en ningún momento una operación sospechosa ni inusual", adicionando que "En la compraventa de P.I.S.A., la operación se realizó mediante cheques y cuentas bancarias (cumpliendo así con el punto 3 del inciso k). Asimismo, se contaba con balances correspondientes a los años 2013/2014 y*

2015 que daban cuenta de que la suma correspondiente al pago del precio representaba una porción mínima de los ingresos por adelantos de los clientes (Cumpliendo así con el punto 5 del inciso k). Por último, el escribano certifico la firma en 5 operaciones que involucraron un monto total muy superior al de la compraventa (...) Como se ha dicho hasta el hartazgo en este descargo, NUNCA existió la más mínima sospecha en ninguna de las operaciones llevada a cabo por el Escribano SENILLOSA”.

Que por otra parte, en la presentación adicional a su descargo inicial el sumariado manifestó “cuando A.F.P. decidió poner su propio nombre a la sociedad no lo hace para lavar activos ni para cometer ilícitos ni para poner a la sociedad de pantalla de otros socios. Al poner su nombre, pide a los terceros que entiendan que cuando hablan o tratan con esa sociedad es como si lo hicieran con él mismo. Incluir el propio nombre en una sociedad es como si lo hicieran con el mismo. Incluir el propio nombre en una sociedad comercial es un acto de valentía y osadía poco común en la sociedad moderna. (...) Por ello, cuando se acusa a F. P. de que probablemente utilice la sociedad como pantalla, desconocen el valor sentimental y moral que tiene para un empresario poner en una sociedad su propio nombre y apellido. Téngase en cuenta que la persona que firmo P.I.S.A. en representación de F.P.A.I.A.S.A. fue el propio F.P. como presidente de la misma”.

Que con respecto al cliente D.G., el sumariado expresó que: “el análisis que ha realizado la UIF fue erróneo en sus conclusiones y en las personas cuyos datos se deben requerir”, agregando que “K.L. era la vendedora y como tal no tenía que justificar los ingresos. En cuanto a D.G. y su mujer A.C. son los que justificaron adecuadamente sus ingresos”.

Que a su vez el sumariado expresó que a “D.G. y su familia los conozco hace más de 12 años. Tienen una sociedad AGM M.S.R.L. En ese marco la compra realizada por G. no le pareció al Escribano ni siquiera sospechosa por cuanto era una adquisición coherente con su actividad comercial (...) A mayor abundamiento, dado que la operación de compra la realizaron los cónyuges en un 50% cada uno, el monto que cada uno de ellos debía justificar apenas alcanzada la suma de \$1.150.000 lo cual constituía aún más un monto bastante bajo para una operación de compraventa en el año 2015”.

Que, por último, el sumariado manifestó que “atento a que la operación no resultaba excesiva ni demasiado abultada o atípica ni ajena al conocimiento que tenía el Escribano SENILLOSA del cliente, no resultaba bajo ningún aspecto sospechosa”.

Que al momento de alegar, el sumariado no hizo referencia al cargo imputado.

Que el cargo de marras encuentra respaldo en las conclusiones arribadas en el informe final efectuado por la Dirección de Supervisión (fs. 972/980).

Que vista la imputación, la normativa y el descargo de los sumariados, se analizará a continuación la operatoria llevada a cabo por P.I.S.A. y por el Sr. D.G., a fin de considerar si la misma debió ser reportada por el Sujeto Obligado

Que las operaciones no fueron cuestionadas por el sumariado en cuanto a su existencia y no fueron reportadas, conforme indica el informe de la Dirección de Supervisión.

Que con relación a la operación con P.I.S.A., en primer lugar y teniendo en cuenta el análisis de la documentación aportada por el Sujeto Obligado respecto al legajo “P.I.S.A.” surge que la sociedad se constituyó el 7 de febrero de 2013 con un capital de PESOS CIEN MIL (\$100.000) representado por 100.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, las cuales se suscribieron de la siguiente manera: F.P.& A.I.A.S.A., 40.000 acciones;



C.M.S., 30.000 acciones; y H.J.G., 30.000 acciones.

Que también se advierte que el domicilio que la sociedad "P.I.S.A." fija en el contrato de compraventa -Alicia Moreau de Justo Nro. 2030, segundo piso, Oficina 201, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- resulta ser el mismo en que se encuentra la sede social de la empresa "F.P. & A.I.A.S.A.".

Que esta cuestión podría indicar que sus accionistas y/o miembros del directorio coincidirían en ambas empresas, hecho que en cualquier sociedad no implicaría un factor de riesgo pero que en el contexto de esta operación debió analizarse como tal.

Que, además, resulta al menos llamativo que una empresa adquiera un inmueble junto a otra sociedad con la que comparte el mismo domicilio, y el Sujeto Obligado no tome ninguna medida de identificación reforzada.

Que otra cuestión relevante, y que indicaría la falta de conocimiento del cliente y el respectivo análisis por parte del Sujeto Obligado, resulta ser que surge de la escritura de compraventa entre la empresa citada y la M.F. V. que -con fecha 19 de diciembre de 2012 y a través del Decreto Municipal N° 3461/12-, se convocó a un Concurso de Antecedentes y Propuestas a inversores privados interesados en el desarrollo de un parque industrial.

Que seguidamente indica la escritura que, con fecha 25 de julio de 2013 y través del Decreto Municipal N° 2589/13 *"... se selecciona la propuesta presentada por la firma P.I.S.A. para llevar adelante el desarrollo..."* (fs. 54 vta.), otorgándole la M.F.V. a "P.I.S.A." la tenencia precaria del inmueble para la realización de las obras necesarias para el desarrollo del predio.

Que cabe aclarar que dicha sociedad se constituyó tres meses antes de la adjudicación en cuestión y con un capital social de PESOS CIEN MIL (\$ 100.000), y no consta al momento de la operación documental respecto de aumentos ni aportes de capital que pudieran justificar la capacidad económica de la misma para llevar adelante el proyecto., indicándose que se acordó entre las partes que la compradora se encontraba obligada al pago del precio de la tierra sobre la que se asienta el inmueble una vez cumplida cada etapa de obra.

Que el precio de todo el inmueble se fijó en la suma de PESOS DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL (\$12.705.000).

Que una vez realizadas las obras en un determinado porcentaje del predio, la empresa "P.I.S.A." solicitó la transmisión a su nombre de la titularidad dominial de las superficies involucradas, cuya valuación fue PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 5.207.877,80), situación que se encuentra reflejada en la escritura de compraventa analizada de fecha 16 de diciembre de 2015 (fs. 53/85), sin poder determinarse el origen de los fondos ni su correspondencia con la solvencia económica de la empresa compradora.

Que el mínimo análisis de los antecedentes documentales descriptos en la propia escritura debió llamar la atención del Sujeto Obligado, destacándose que no le resultó llamativo que una sociedad conformada en febrero de 2013 ganara un Concurso de Antecedentes en julio de ese mismo año, es decir, tres meses después de su constitución.

Que en dicho Concurso se compromete a realizar obras con su correspondiente costo, para luego de ello requerir la transferencia de la titularidad dominial pagando el precio pactado de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 5.207.877, 80).

Que este hecho que se perfeccionó con la intervención del Sujeto Obligado fue llevado a cabo, como quedó dicho, sin ningún tipo de mecanismo y/o procedimiento de control por parte del Escribano [REDACTED]

Que se constató que el Sujeto Obligado no cumplió con su deber de requerir a su cliente la copia del último balance auditado por contador público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, como así tampoco con su obligación de requerir documentación respaldatoria del origen de los fondos en virtud del monto de la transacción (artículo 8º incisos j) y k) de la Resolución UIF N° 21/2011).

Que además, en consonancia con lo expuesto, el Sujeto Obligado debió detectar con los datos que tenía y que fueran descriptos en los párrafos precedentes, que podría tratarse de una empresa pantalla utilizada por personas humanas para realizar la operación, por encuadrarse en los supuestos de procedimientos reforzados de identificación, previstos en el artículo 13 incisos a) y b) de la Resolución citada.

Que, en este sentido, se puede determinar que existen elementos suficientes para otorgarle a la operación el carácter de "sospechosa", para lo cual no solo deben tenerse en cuenta los argumentos expuestos sino también que, conforme surge del artículo 19 de la Resolución que regula a los Escribanos Públicos, dicha norma los obliga a reportar aquellas *"... operaciones inusuales que de acuerdo a la idoneidad exigible en función de la actividad que realiza el análisis efectuado, consideren sospechosa de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo..."*, para lo cual deben valorarse determinadas circunstancias, como ser los montos, tipos, frecuencia y naturaleza de las operaciones que realicen los clientes que no guarden relación con sus antecedentes y su actividad económica (artículo 19 inciso 1) de la Resolución UIF N° 21/2011).

Que como fuera expuesto, la empresa que compró el inmueble no contaba con los antecedentes necesarios para llevar adelante la operación en estudio, en virtud de la naturaleza de la misma, sumándose a ello la circunstancia de que las obras realizadas en el predio y la posterior compra por parte de "P.I.S.A." se realizó con fondos cuyo origen no se encuentra debidamente justificado.

Que los mismos elementos descriptos en los párrafos precedentes permiten encuadrar a la misma operación en el inciso 1) del referido artículo 19, atento a la complejidad y modalidad no habitual de la operación que realizó el requirente.

Que por otra parte y con relación a la operación de D.G. y K.L., teniendo en cuenta el análisis de la documentación aportada por el Sujeto Obligado respecto al legajo de D.G. surge que los compradores abonaron por un inmueble el monto de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL (\$ 2.300.000), en condiciones similares a las expuestas en el análisis de la operación anterior.

Que en virtud de la fecha de la operación (18 de febrero de 2015), el Sujeto Obligado debió haber requerido documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos, conforme surge del inciso k) del artículo 8º de la Resolución UIF N° 21/2011 y modificatorias.

Que como quedó expuesto en el punto 22 del Informe elaborado por la Dirección de Supervisión (fs. 976) donde se analizó esta operación, no surge de las constancias del legajo del requirente documentación respaldatoria alguna que permita justificar el origen lícito de los fondos.

Que, sin embargo, se agregó a fs. 523 la constancia de inscripción ante la AFIP del señor D.G., de la cual surge que se encuentra inscripto como Trabajador Autónomo Categoría Cat. III Ingresos hasta PESOS QUINCE MIL (\$ 15.000).



Que cabe agregar que el sumariado en su descargo sostuvo que conoce al cliente *“hace más de 12 años. Tienen una sociedad AGM M. S.R.L. Que fue creada en el año 2003 con sede en Avellaneda y al mudar el domicilio de dicha sociedad a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comencé a prestar servicios a esa sociedad”* pero, sin embargo, es de destacar que a fines de cumplimentar acabadamente con las obligaciones previstas en la normativa de PLA/FT resulta imperativo solicitar y analizar la documentación del cliente en relación a cada operación y/o transacción, así como otorgarle un perfil transaccional, apreciándose que en el caso de marras no acompañó la documentación de respaldo de la operatoria que indicase el origen lícito de los fondos en su legajo, ni al momento de su solicitud por parte de la Supervisión.

Que resulta suficiente la información que surge de la constancia de inscripción, en tanto no alcanza para justificar el monto que tuvo la operación, advirtiéndose también que al momento de la misma el Sujeto Obligado contaba con esta información debido a que forma parte del legajo y llevo adelante la transacción sin requerir documentación original adicional.

Que los elementos y las circunstancias que surgen de la operación permiten afirmar que reúne la condición de “sospechosa”, debido a que resulta evidente que el monto de la misma no guarda relación con los antecedentes y la actividad económica del comprador.

Que la norma en cuestión obliga al Sujeto Obligado a analizar aquellas operaciones inusuales y reportar las sospechosas.

Que, adicionalmente, corresponde considerar que a fs. 10 el Sujeto Obligado indica el detalle de las políticas que lleva a cabo, indicando que *“se solicita y se recibe la documentación respaldatoria sobre la licitud y el origen de los fondos utilizados y, en los casos en que corresponde, se realiza el procedimiento reforzado de identificación para llegar a conocer al verdadero dueño del negocio”*, *“se califican las operaciones como normales, inusuales o sospechosas”* y *“se analizan las operaciones de un mismo sujeto dentro del mismo año”*, entre otras medidas.

Que no obstante ello, del análisis de los legajos aportados durante la supervisión se advierten deficiencias en los controles implementados por el Sujeto Obligado, poniéndose de manifiesto que -en particular- en estas dos operaciones no advirtió ni analizó las inusualidades observadas por la Dirección de Supervisión de esta UIF.

Que resulta evidente que la responsabilidad que le impone la Ley genera en el Sujeto Obligado la obligación de no solo de tener conocimiento de las normas en materia de prevención de LA y FT, sino de aplicar los mecanismos que de ellas surgen a fin de realizar un adecuado análisis respecto de las operaciones en las que interviene.

Que la condición de Sujeto Obligado obliga a los Escribanos Públicos, en su rol de colaboradores del esfuerzo estatal en la lucha contra el LA/FT, a estar interiorizados en las posibles tipologías empleadas utilizadas para ingresar al circuito financiero fondos provenientes de actividades ilícitas.

Que ese conocimiento, que la norma llama idoneidad, le exige analizar las operaciones en que participa de manera profunda, responsable y acorde a la actividad que realiza.

Que dicha exigencia es más clara en el caso de la política de “conozca a su cliente”, debido a la posibilidad de contrastar los requisitos que prevé la norma con los datos que surgen del legajo de cada cliente y operación.

Que, en este caso, además de haberse constatado incumplimientos de carácter formal en los datos de identificación de los clientes, cuyo detalle se encuentra individualizado en el análisis de cada escritura, se advirtió

además que se realizaron dos operaciones, identificadas en el punto 6 del informe que luce agregado a estas actuaciones, que no cuentan con documentación respaldatoria que permita establecer el origen lícito de los fondos y su correlación con los montos abonados, incumpliendo lo prescripto en los artículos 7° inciso k) (D.G.-K.L.) y 8° inciso k) (P.I.S.A.) de la Resolución UIF Nro. 21/2011.

Que la Debida Diligencia del Cliente prevista en la Recomendación 10 del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI), junto a las Recomendaciones 11, 12, 15 y 17 se aplican a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), según surge de la Recomendación 22.

Que dicho concepto abarca a los notarios (Escribanos) cuando se disponen a realizar transacciones para sus clientes sobre actividades determinadas (en este caso compraventa de inmuebles).

Que se suma a lo expuesto el hecho de no haber realizado ningún análisis relacionado a la materia de prevención de LA/FT, lo que le hubiera permitido al Sujeto Obligado la posibilidad de realizar un Reporte de Operación Sospechosa tal como lo recomienda el GAFI en la Recomendación 23, en la que determina que debe exigirse a los notarios que reporten las operaciones sospechosas cuando, en nombre de un cliente o por un cliente, se involucran en una transacción financiera con relación a las actividades descritas en el párrafo (d) de la Recomendación 22 (compraventa de inmuebles y/o creación de personas jurídicas).

Que en cuanto a las defensas traídas por el sumariado, relacionadas con que las operaciones realizadas por sus clientes fueron acordes a sus ingresos y actividades declaradas, la Instrucción -al igual que la Dirección de Supervisión- consideró, por un lado, que la sociedad P.I.S.A. declaró un patrimonio de PESOS CIEN MIL (\$100.000) sin aportar documentación respaldatoria alguna y, por otro lado, el Sr. D.G. llevó a cabo una operación de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL (\$2.300.000) habiendo declarado ser trabajador autónomo categoría T1, con un ingreso promedio mensual de PESOS QUINCE MIL (\$15.000).

Que, a mayor abundamiento y en relación a la defensa de los sumariados relacionada con que no hubo ni pudo haber operaciones que se pudieran caracterizar como sospechosas, cabe señalar que el Sujeto Obligado debió haber identificado a los clientes conforme los términos de la normativa UIF, definiendo un perfil para cada cliente y solicitando información respecto del origen de los fondos, extremos que no se materializaron en estos casos.

Que así las cosas, de haber definido un perfil, el Sujeto Obligado hubiese advertido que el cliente operaba por fuera de aquél, arrojando dicho extremo una inusualidad que el sumariado debió haber analizado para eventualmente descartarla o reportarla.

Que en atención a lo anterior, ha quedado demostrado que el sistema de PLA/FT del Sujeto Obligado representaba un riesgo alto, y que no se adoptaron medidas a fin de mitigar los mismos, por lo que se puede afirmar que el Sujeto Obligado no administraba ni gestionaba el riesgo de operaciones inusuales y sospechosas de LA/FT.

Que tal como señala la ley, una operación sospechosa no consiste en un delito sino en una inusualidad que no tiene una justificación aparente.

Que en el cargo en análisis se enunciaron las distintas inusualidades detectadas por la Dirección de Supervisión de esta Unidad, las que no han podido ser desvirtuadas por el sumariado en estas actuaciones; ello, toda vez que el Escribano [REDACTED] debía conocer debidamente a los clientes P.I.S.A y D.G. y K.L., y así constatar el origen de los fondos con los cuales realizaron las operaciones.

Que, en efecto, el cumplimiento de esa obligación deviene esencial para una adecuada sistematización, alimentación e integración de la base de datos con que cuenta esta UIF, operación que puede derivar en importantes hallazgos que permitan contribuir a detectar operaciones o tipologías delictivas y prevenir e impedir el LA/FT.

Que esta labor de interrelación de información que desarrollan los analistas de la UIF puede servir para el avance de una investigación judicial en curso en la que se investiguen directamente los hechos comprendidos en el ROS, o para el desarrollo de una investigación judicial en curso en la que se investiguen otros hechos, con los que la información contenida en ese reporte pueda encontrarse vinculada, y en ese sentido deviene claro que si la información correspondiente no se pone a disposición de esta UIF no puede efectuarse ese análisis, circunstancia que interferiría en la labor de PLA/FT que el legislador le ha impuesto.

Que, en definitiva, la remisión de la información referida a operaciones sospechosas a través del correspondiente ROS -en las condiciones que establece la normativa vigente- no constituye una mera formalidad, sino que resulta de vital importancia a los fines de que esta UIF desarrolle su misión legal en forma eficaz y eficiente.

Que, por tanto, la imputación formulada no denota una opinión subjetiva y que nada tiene que ver con la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo sino la atribución de una infracción a una obligación de los Sujetos Obligados, cuyo cumplimiento resulta de vital relevancia para el cumplimiento de las funciones de esta Unidad.

Que luego de analizar cada una de las defensas planteadas por el sumariado, la Instrucción concluyó que ninguna de ellas tiene virtualidad para eximirlo de responsabilidad en orden a los incumplimientos imputados.

Que en virtud de todo lo expuesto, la Instrucción entendió que se encuentra acreditado el cargo por falta de reporte de operaciones, por la suma total de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS (\$7.507.877,80), en relación a las operaciones realizadas por los clientes P.I.S.A. y D.G. - K.L., con fecha 16 de diciembre de 2015 y 18 de febrero de 2015 respectivamente, en infracción al artículo 21 inciso b) de la Ley N° 25.246 y el inciso 1) del artículo 19 de la Resolución UIF N° 21/2011, y por ello aconsejó aplicar la sanción de una vez el monto de las operaciones.

Que en este estado, y luego del análisis de las distintas infracciones imputadas, corresponde señalar que en la tramitación de las presentes actuaciones se ha cumplido con el debido proceso adjetivo que impone el inciso 8) del artículo 14 de la Ley N° 25.246, y que el inciso f) del artículo 1° del Decreto-ley N° 19.549/72 garantiza para los procedimientos administrativos -entre ellos los sancionadores- como comprensivo de la posibilidad de ser oído, ofrecer y producir prueba y obtener una decisión fundada (conf. Tawil, Guido Santiago "Procedimiento Administrativo", Abeledo Perrot, 2010, p. 535; Dictamen PTN 223:128; y fallos CSJN 186:297 y 207:293).

Que en efecto, es menester destacar que se ha dado acabado cumplimiento al imperativo de todo sumario administrativo destinado a que se consignen los cargos imputados y a otorgar una oportuna y adecuada posibilidad del ejercicio del derecho de defensa ("Procedimiento administrativo disciplinario", Alfredo L. Repetto, Cathedra Jurídica, 2° edición ampliada y actualizada, p.380), procurando equilibrar la relación entre las garantías de los administrados y las prerrogativas de la Administración ("Procedimiento Administrativo", Guido Santiago Tawil, Abeledo Perrot, 2010, p. 522).

Que con ello, a su vez, se ha dado cumplimiento con la garantía de la tutela efectiva prescripta por el artículo 18 y el inciso 22 del 75 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y 8° de la CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS y su aplicación al procedimiento administrativo a la luz de lo resuelto por la CSJN

(Fallos 325:1649 “Banco Integrado Departamental” y 327:1249 “Atienza”), y por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS en los casos “Tribunal Constitucional vs. Perú” (sentencia del 31 de enero de 2001) y “Baena Ricardo y otros vs. Panamá” (sentencia del 2 de febrero de 2001).

Que las conclusiones a las que ha arribado la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador de esta Unidad, tanto en lo que hace al procedimiento seguido para la comprobación de los presuntos incumplimientos detallados en la Resolución de Instrucción, así como para el correspondiente aconseje sancionatorio, se encuadran en el ejercicio de su competencia específica (Resoluciones UIF Nros. 111/2012 y 152/2016 y modificatorias).

Que, en lo que respecta a las sanciones a aplicar, es menester recordar que el inciso 1) del artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias establece que la persona que actuando como órgano o executor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones ante esta UIF será pasible de sanción de multa.

Que el artículo 20 bis de la Ley N° 25.246 establece que la totalidad de los integrantes del órgano de administración (incluido el oficial de cumplimiento) son responsables solidaria e ilimitadamente por el deber de informar previsto en el artículo 21 de la referida Ley.

Que dichas previsiones normativas se encuentran alineadas a los estándares internacionales en la materia, toda vez que la Recomendación 35 del GAFI establece que los países deben asegurar la existencia de una gama de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, y que las mismas deben ser aplicables no sólo a las instituciones financieras y a las actividades y profesiones no financieras designadas, sino también a sus directores y a la alta gerencia.

Que, por su parte, el inciso 2) del artículo 24 de la Ley N° 25.246 establece que la misma sanción será aplicable a la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñaren los sujetos infractores.

Que, asimismo, debe tenerse presente que la finalidad esencial de las sanciones que aplica esta UIF es la prevención y disuasión de conductas reprochables y que ello tiende a evitar la reiteración de los incumplimientos por parte de los sumariados.

Que, en tal sentido, mediante el inciso 3) del artículo 24 de la referida Ley N° 25.246 se establece un monto mínimo y un máximo de la multa (entre \$10.000 y \$100.000) para aquellos casos en que no pueda determinarse el valor real de los bienes involucrados en la operación.

Que, respecto al *quantum* de la sanción, es dable señalar que en numerosas oportunidades se ha dicho que la determinación y graduación de la sanción es resorte primario de la autoridad administrativa, principio que solo cede ante una manifiesta arbitrariedad (conf. “Musso, Walter c. Prefectura Naval Argentina”, sentencia C.N.A.C.A.F. del 27.05.1997; “Alles, Gerónimo c. Prefectura Naval Argentina” sentencia C.N.A.C.A.F., sala III, del 03.02.1998; “Travaglia, José O. y otros c/ BCRA – Resolución N° 109/2012 –Expte. 100.045/94 Sum. Fin. N° 893- sentencia C.N.A.C.A.F., sala V, del 19.07.2006; y “Transatlántico S.A. Caja de Cambio y otros c. BCRA-Resol.419/11 – Expte. 100.661/04 Sum. Fin. 1138” sentencia C.N.A.C.A.F., sala II, del 10.07.2012, entre otros).

Que, sin embargo, debe indicarse que el procedimiento administrativo que se despliega a fines de efectivizar el régimen sancionatorio de esta UIF debe asegurar la vigencia del principio de razonabilidad en el ejercicio de la potestad sancionatoria, manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que se deben tutelar, a fin de que respondan a lo necesario para la satisfacción de su cometido.

Que, en definitiva, no resulta exigible una exacta correspondencia numérica entre la multa y la infracción cometida, sino que es suficiente que la autoridad de aplicación realice una apreciación razonable de los diferentes parámetros legales previstos y las circunstancias fácticas tenidas en cuenta para justificar la sanción (Fallo "Swiss Medical S.A. c. DNCI s/ defensa del consumidor - ley 24.240 art. 4", sentencia C.N.A.C.A.F, Sala V del 14.07.2015).

Que, en consecuencia, resulta pertinente enunciar cuáles son en el caso objeto de análisis los factores de ponderación que sirven de guía para la cuantificación de las sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley N° 25.246, otorgando proporcionalidad y motivando el ejercicio de dicha facultad por parte de esta UIF, esto es: (i) el tipo de sujeto obligado, ponderándose que el Sujeto obligado se encuentra expuesto a grandes riesgos en materia de LA/FT; (ii) la naturaleza de cada una de las infracciones constatadas y el riesgo que representan; (iii) la actitud tomada por el Sujeto Obligado durante la tramitación del sumario; y (iv) la falta de antecedentes del sumariado ante esta Unidad.

Que por todos los factores de ponderación señalados *ut supra*, la Instrucción formó su sana convicción respecto del monto de la sanción aconsejada.

Que, en tal entendimiento, se comparten las conclusiones arribadas por la Instrucción en el Informe Final respecto de la constatación de los cargos endilgados en la Resolución de Instrucción y de los montos de las multas propuestos, por considerarlos razonables y proporcionales a los cargos imputados.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, y el Decreto N° 290/2007 y sus modificatorios.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Rechazar, por improcedentes, los planteos de nulidad e inconstitucionalidad incoados por el sumariado en su escrito de descargo, por las consideraciones vertidas en el Considerando de la presente.

ARTICULO 2°.- Absolver, al escribano [REDACTED], del cargo imputado en infracción al artículo 7° inciso f) de la Resolución UIF N° 21/2011 y modificatorias.

ARTICULO 3°.- Declarar la responsabilidad, del escribano [REDACTED]), en su carácter de sumariado, por las infracciones constatadas referidas a: i) falta de identificación y conocimiento del cliente; (ii) falta de documentación respaldatoria; (iii) falta DDJJ de Personas Expuestas Políticamente (PEP); (iv) falta de consulta al listado de terroristas; y (v) falta de reporte de operaciones, en infracción a los artículos 20 bis, 21 incisos a) y b), y 21 bis de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, y a los artículos 7° incisos i), j) y k), 8° incisos b), g), h), i), j) y k), 9° inciso d), 10, 13 incisos g) y f) y 19 inciso 1) de la Resolución UIF N° 21/2011.

ARTICULO 4°. – Imponer la sanción de multa, por la suma total de PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS (\$7.897.877,80), al escribano [REDACTED]), en su carácter de

sumariado, de conformidad con lo establecido en el inciso 3) del artículo 24 de la Ley 25.246 y sus modificatorias, de acuerdo al siguiente detalle:

1. MULTA DE PESOS CIEN MIL (\$100.000) por falta de identificación y conocimiento del cliente, en infracción al artículo 7° incisos i) y j), 8° inciso b), g), h), y j), 9° inciso d), 10 y 13 inciso g) de la Resolución UIF N° 21/2011;
2. MULTA DE PESOS NOVENTA MIL (\$90.000) por falta de documentación respaldatoria, en infracción al artículo 7° inciso k) y 8° inciso k) de la Resolución UIF N° 21/2011;
3. MULTA DE PESOS CIEN MIL (\$100.000), por falta de DDJJ de Persona Expuesta Políticamente (PEP), en infracción a los artículos 7° inciso j) y 8° inciso i) de la Resolución UIF N° 21/2011;
4. MULTA DE PESOS CIEN MIL (\$100.000) por falta de verificación del listado de terroristas y/u organizaciones terroristas, en infracción al artículo 13 inciso f) de la Resolución UIF N° 21/2011;
5. MULTA de una vez el valor de las operaciones, por la suma de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS (\$7.507.877,80) por falta de reporte de operaciones sospechosas de acuerdo a lo indicado en el Considerando de la presente, en infracción al artículo 21 inciso b) de la Ley N° 25.246, y artículo 19 inciso 1) de la Resolución UIF N° 21/2011.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese, e intímese al sumariado a hacer efectivo el pago de las multas impuestas dentro del plazo de DIEZ (10) días de notificada la presente Resolución, el que deberá materializarse mediante el Sistema de Recaudación de la Administración Pública -eRecauda- (<https://erecauda.mecon.gov.ar>). En caso de cancelarse la multa deberá acreditarse el pago en el expediente dentro del plazo de CINCO (5) días de haberse efectuado, en la sede de la UIF, sita en Av. de Mayo N° 757/761 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo identificar en forma clara los sumariados que han efectuado el pago. Todo ello, bajo apercibimiento de iniciar la correspondiente ejecución.

ARTÍCULO 6°.- Hacer saber, al sumariado, que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrá recurrirse en forma directa en el plazo de treinta (30) días por ante la justicia en el fuero Contencioso Administrativo Federal, conforme lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 25.246 y el artículo 25 bis de la Ley N° 19.549 y modificatorias.

ARTICULO 7°.- Comunicar la presente medida al Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los artículos 31 y 35 Resolución UIF N° 111/2012.

ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese y, cumplido, archívese.

Digitally signed by YACOBUCCI Ignacio Martín
Date: 2025.01.02 16:07:09 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Martín Yacobucci
Presidente
Unidad de Información Financiera

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.01.02 16:07:16 -03:00